

RADICADO: 2021-0014
ACCIONANTE: SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, apoderada de HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA.
ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO CATORCE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA

Bucaramanga, once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Decide el despacho, en primera instancia, la acción de tutela radicada bajo el No. 6800014004014-2021-0014-00, instaurada por SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, apoderada de HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ANTECEDENTES

La abogada SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.140.816.888 y portadora de la T.P No. 211.808 del CSJ, actuando como apoderada del señor HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.066.504, presentó acción de tutela contra el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por los siguientes hechos:

El día 30 de noviembre de 2020 elevó derecho de petición ante la SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER a fin de solicitar lo siguiente:

Copia autentica de los Actos Administrativos de nombramiento del docente **HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA** durante el tiempo en que estuvo vinculado a dicha entidad.

certificado de tiempo de servicios que comprenda toda la historia laboral del señor PINILLA, indicando el tipo de vinculación.

dejar sin efectos jurídicos las certificaciones de tiempos de servicio expedidos anteriormente.

Hasta el momento la entidad accionada no ha dado respuesta al mismo.

SUJETOS DE ESTA ACCIÓN

Accionante: SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.140.816.888 y portadora de la T.P No. 211.808 del CSJ, actuando como apoderada del señor HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.066.504, con dirección de notificaciones en el correo electrónico sh.pacheco@roasarmiento.com.co.

Entidad Accionada: DEPARTAMENTO DE SANTANDER- SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER.

RADICADO: 2021-0014
ACCIONANTE: SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, apoderada de HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA.
ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La accionante pretende el amparo del derecho fundamental de PETICIÓN del señor HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA, el cual, a su juicio está siendo desconocido por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER- SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, al no haberle dado respuesta oportuna y de fondo a la petición presentada el 30 de noviembre de 2020.

Expresamente solicita que la accionada otorgue respuesta de fondo al derecho de petición elevado el día 30 de noviembre de 2020.

RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER:

MARIA EUGENIA TRIANA VARGAS Secretaria de Educación Departamental de Santander, manifestó que esa dependencia a través de la oficina de historias laborales mediante correo electrónico enviado el día 8 de febrero de 2021 le dio contestación en debida forma a la petición hecha por el accionante, por lo que argumenta que se está frente a una carencia actual de objeto y en tal sentido solicitó se declare que en lo que respecta a la presente acción de tutela se ha dado un hecho superado.

CONSIDERACIONES

LEGITIMACIÓN

La ejerce la abogada SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.140.816.888 y portadora de la T.P No. 211.808 del CSJ, actuando como apoderada del señor HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.066.504, a fin de buscar la protección del derecho fundamental de petición de su apoderado, por lo cual como profesional del derecho y conforme al poder conferido por el señor PINILLA TRIANA está facultada para acudir ante el Juez Constitucional, en virtud del artículo 86 de la Constitución Política.

COMPETENCIA

Este juzgado es competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, 1 del Decreto 1382 del 2000, 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, así como en el Auto 050 de 2015 de la Corte Constitucional y en el artículo 1º del decreto 1983 de 2017, según el cual, “ Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

“1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.”

RADICADO: 2021-0014

ACCIONANTE: SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, apoderada de HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA.

ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Así mismo se establece que tanto la accionante como el accionado tienen su domicilio en la ciudad de Bucaramanga, ámbito territorial en el que ejerce sus funciones este despacho judicial.

PROBLEMA JURÍDICO

¿En la presente acción de tutela se dan las condiciones para estimar superado el hecho que dio lugar a ella, esto es, el no haberse dado respuesta oportuna y de fondo por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER- SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER a la petición elevada por la abogada SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO como apoderada del señor HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA el día 30 de noviembre de 2020?

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

Derecho de Petición

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, la Ley 1755 de 2015 reguló todo lo concerniente al derecho fundamental de petición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

La Corte Constitucional se ha referido en numerosas oportunidades al derecho de petición, al punto que las sentencias, T-377 de 2000, T-1160/2001 y T-237/16 entre otras¹ se ha ocupado de resumir los parámetros jurisprudenciales sobre su sentido, contenido y alcance, fijando los criterios que debe seguir el Juez constitucional para determinar la procedencia y efectividad de este derecho fundamental.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

Sobre este aspecto se tiene pronunciamiento reciente de la Corte constitucional en sentencia T-155 de 2017, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos, en la cual se refiere que:

“El artículo 86 de la Constitución Política faculta a todas las personas para exigir ante los jueces, mediante un procedimiento preferente, la protección oportuna de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando de alguna manera resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier entidad pública o privada.

Sin embargo la doctrina constitucional ha reiterado que la acción de tutela, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”². De este modo, la tutela no sería un mecanismo idóneo, pues ante la ausencia de supuestos facticos, la acción de tutela pierde su eficacia.³

Al desaparecer el objeto jurídico sobre el cual recaería la eventual decisión del juez constitucional encaminada a amparar y proteger las garantías y los derechos que se

¹ Sentencias T-112 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999, T-079 de 2001, T-116 de 2001, T-129 de 2001, T-396 de 2001, T-418 de 2001, T-463 de 2001, T-537 de 2001 y T-565 de 2001.

² Sentencia T-970 de 2014, T- 011 de 2016.

³ Sentencias T-495 de 2001, T- 692 de 2007, T178 de 2008, T-975 de 2008, T-162 de 2012, T- 499 de 2014, T- 126 de 2015, Sentencia T- 011 de 2016.

RADICADO: 2021-0014

ACCIONANTE: SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, apoderada de HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA.

ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

encuentren en peligro, sería inocua y carecería de todo sustento y razón de ser, contrariando el objetivo que fue previsto para esta acción⁴; sin embargo esto no significa que el juez constitucional no pueda pronunciarse de fondo ante una evidente infracción a los derechos fundamentales, corregir las decisiones judiciales de instancia y emitir una orden preventiva al respecto⁵.

La Sentencia T-494 de 1993 determinó al respecto que: “La tutela supone la acción protectora de los derechos fundamentales, ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente se hubiese presentado un peligro ya subsanado”.

En Sentencia T-481 de 2016, esta Sala reiteró el desarrollo constitucional respecto del concepto de “carencia actual de objeto” y los tres eventos que se configuran, con el fin de identificar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Este fenómeno puede surgir de tres maneras: (i) hecho superado, (ii) daño consumado” o (iii) situación sobreviniente.⁶

*El **hecho superado**: “regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, **como producto del obrar de la entidad accionada**, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer”⁷*

CASO CONCRETO

Vulneración de Derechos Fundamentales/ Hecho Superado

En el asunto materia de análisis sería del caso proceder a determinar si la entidad demandada efectivamente vulneró el derecho fundamental de petición consagrado en el art 23 de la C.N, cuya protección solicita la actora, si no fuera porque se advierte que en el trámite de la presente acción de tutela la entidad accionada, SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, a través de su secretaria MARIA EUGENIA TRIANA VARGAS, allegó ante este despacho judicial copia de la respuesta a la petición elevada por la accionante, en la cual se aprecia que se está dando resolución de fondo al asunto solicitado de forma clara, precisa y congruente con lo peticionado (folio 36), de la siguiente manera:

“Una vez consultados y revisados los sistemas de información electrónicos y los fondos documentales con los que cuenta el Equipo de Historias Laborales de la Secretaría de Educación Departamental de Santander, NO se encuentran registros del señor HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.066.504, por lo cual no es posible emitir ningún tipo de certificación sobre el particular”.

En tal sentido y conforme a la respuesta dada por la entidad accionada (folio 36) y habiéndose acreditado el envío de la respuesta (folio 37) al correo de notificaciones judiciales de la accionante, el cual fue el mismo que incluso se indicó dentro de la presente acción, se tiene que si bien es cierto, la respuesta no

⁴ Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005, Sentencia T-867 de 2013.

⁵ Sentencia T-200 de 2013.

⁶ Sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.

⁷ Sentencia T-481 de 2016

RADICADO: 2021-0014

ACCIONANTE: SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, apoderada de HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA.

ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

es favorable a lo pretendido, cumple con su resolución en forma clara, expresa y abordando de fondo del asunto pretendido.

Pues bien, respecto al derecho fundamental de petición, la Corte Constitucional reiteró en la Sentencia C-418 de 2017, que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.

6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

En consecuencia, resulta claro que mediante oficio con fecha de remisión del día 08 de febrero de 2021, la entidad accionada, a través de su coordinador de historias laborales, procedió a dar respuesta a la petición elevada por la accionante, abogada SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO como apoderada del señor HECTOR ISAURO PINILLA TRIANA, la cual fuere elevada el día 30 de noviembre de 2020.

En consecuencia, como quiera que se verifica con la copia de la repuesta allegada por la entidad accionada que la misma sí se produjo, que fue remitida a la accionante y que se otorgó respuesta de fondo, clara y precisa respecto a lo solicitado en el derecho de petición elevado por el accionante, sin que ello implique como lo ha establecido la Corte Constitucional, la aceptación de lo solicitado, habrá de declararse hecho superado el objeto de la tutela.

Lo anterior, con fundamento en la reiterada jurisprudencia constitucional⁸ según la cual *“...cuando se demuestra que los hechos presuntamente violatorios o que ponen en riesgo los derechos fundamentales que motivaron la instauración de tutela desaparecen o son superados, la acción constitucional pierde su sentido y razón de ser, pues las decisiones que adoptase el juez de tutela se tornarían inocuas”.*

⁸ Sentencias T-1272/05, T-071/06, T-096/06, T-306/06 y T-696/06, entre otras.

RADICADO: 2021-0014
ACCIONANTE: SHIRLEY DE LA HOZ PACHECO, apoderada de HECTOR ISAURO PINILLA
TRIANA.
ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En resumen, la acción carece de objeto por haberse superado el hecho que dio origen a su presentación.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CATORCE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se ha SUPERADO EL HECHO que dio origen a la tutela.

SEGUNDO: De no ser apelada esta decisión, remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

La Juez,



ANA JOSEFA VILLARREAL GÓMEZ